

JUAN MARCOS HENRÍQUEZ,
DR. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS NOMBRE I

Protesta en la UACH

Lo ocurrido en la Universidad Austral de Valdivia y que afectó a la ministra Lincolao debe ser repudiado por todo el espectro político y así ha sido. La violencia expresada al empujar, insultar y arrojar agua a una persona (sea quien sea) es inaceptable y no debe ser parte del accionar en torno a demandas. La agresión debe erradicarse del diálogo gremial y de la legítima demanda por reivindicaciones. La agresión no se justifica bajo ningún argumento político, por legítima que sea la molestia o razón que la origina. Quien piense distinto le hace un flaco favor al movimiento estudiantil y a la discusión por una mejor educación.

El derecho a protestar no incluye el derecho a agredir, pero el rechazo a la violencia tampoco puede convertirse en argumento para invisibilizar las demandas. Los medios de comunicación y la reacción del gobierno sólo se han centrado en los hechos violentos, mirando sólo una parte del problema; sin embargo, lo que ocurrió en la UACH no fue un hecho sin causa, es más bien un síntoma y una reacción frente a una política de gobierno que recorta presupuestos sin conversar. En contexto, hay que recordar que la ministra llegó a inaugurar el año académico a la UACH que lleva tiempo en incertidumbre producto de una profunda crisis de financiamiento (desvinculación de casi 400 funcionarios, ajustes de gastos y reestructuración). En marzo, el gobierno de Kast anunció la suspensión de las becas de magíster y posdoctorado en el extranjero, como parte de un recorte de más de 23 mil millones de pesos al presupuesto del Ministerio de Ciencias, afectando el proyecto de vida académico de muchos jóvenes en torno a esas becas. Eso no fue una "optimización de recursos", fue más bien un portazo a las expectativas de muchos jóvenes. A eso se sumaron demandas sobre anuncios del gobierno en tono a restricciones al CAE, eliminar la gratuidad para mayores de 30 años, anuncios de desfinanciamiento de la ciencia pública y recortes al aporte estatal a la educación superior. Las causas de la protesta y demandas de los estudiantes no son un invento, son problemas reales que ha instalado el propio gobierno en menos de un mes e inevitablemente llegan con la ministra al campus de la UACH.

Por otro lado, se ha criticado la reacción del rector Montecinos y sus declaraciones reflejan su incomodidad. Sin embargo, expresó su molestia, pena y vergüenza, y anunció el inicio de sumarios. Además, cooperó con la Fiscalía, tratando de esclarecer los hechos. En medio de la presión es destacable que haya mantenido la inviolabilidad del campus universitario, que para algunos es una conquista histórica. En caso contrario, permitiría que la policía entre libremente a los recintos universitarios cada vez que hay una protesta y eso sería abrir una puerta que costaría mucho volver a cerrar. El rector siempre optó por el diálogo, pero fue un grupo de estudiantes, ajenos a la dirigencia estudiantil, el que sobrepasó los límites.

El gobierno reaccionó, con un manual conocido, usando el hecho de violencia para deslegitimar toda protesta y acelerar una agenda punitiva que ya estaba en carpeta. De esta forma, anunció ampliar el proyecto "Escuelas Protegidas" hacia la educación superior, abriendo la posibilidad de quitar la gratuidad a estudiantes involucrados en actos de violencia. La oposición por su parte condenó la agresión sin excepción, pero con matices relacionados a separar con claridad el derecho a manifestarse de los actos de violencia y llamaron al diálogo. En el fondo hicieron un llamado a rechazar la violencia sin transformar esa condena en una renuncia a las demandas.

Si el gobierno de Kast profundiza la lógica de ajuste sin diálogo, lo ocurrido en Valdivia podría no ser un hecho aislado (hay casi una decena de Universidades en crisis financiera, entre otras la UMAG). Un movimiento estudiantil que siente que sus demandas son ignoradas y además ve amenazado su propio financiamiento, tiene motivos para radicalizarse. Las medidas punitivas anunciadas sólo apagan el fuego con bencina. Si el gobierno usa cada incidente de violencia para avanzar su agenda restrictiva sin diálogo o entendimiento, estará impulsando un ambiente de conflicto, que esperamos haga un intento de evitar. En este clima de incertidumbre es vital que la agenda del gobierno de Kast aclare las incertidumbres sembradas en la educación superior. Es urgente que el gobierno se abra a escuchar antes de imponer medidas.